

actual a esos "enigmas". Pero creemos que el análisis de algunas de las cuestiones históricas y presentes de la revolución mexicana puede ser una contribución útil a una discusión que la historia ha puesto impostergablemente en el orden del día.

Medio siglo antes de la cubana y hasta ésta, la revolución más radical de toda América Latina fue la Revolución Mexicana de 1910-1920. En ella se forjó México como la nación que hoy conocemos, con su fuerza interior, sus contradicciones, su carácter único. Esa historia es la raíz profunda a la cual hay que referir las cuestiones del México moderno.

I. *La historia*

Cuando en diciembre de 1914 los dos grandes ejércitos campesinos, la División del Norte de Pancho Villa y el Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata, ocuparon la ciudad de México, la revolución mexicana llegó a su punto culminante. Todas las otras fracciones revolucionarias, burguesas y pequeñoburguesas, estaban en retirada ante el ala más radical, el ala campesina de la revolución.

Pero los campesinos que en la cresta de la ola revolucionaria habían conquistado con sus armas la capital del país, no sabían qué hacer con ella. Ellos querían la tierra, y si repartir la tierra había sido posible mediante los fusiles, asegurar su posesión legal exigía un gobierno que sancionara ese repar-

to. Y los campesinos no tenían programa, ni partido, ni hombres para formar un gobierno. No podían constituirse ellos en clase dominante: o llevaban al poder a la clase obrera, como contribuyeron a hacer con su apoyo los campesinos rusos tres años después, o apoyaban a un gobierno de la pequeñoburguesía revolucionaria o de la burguesía nacional, aunque éste no les asegurara un reparto de tierras tan radical como el que ellos querían.

La primera alternativa era imposible, porque no había en México partido ni dirección de la clase obrera, que era además sólo una pequeña fracción de la población concentrada en puntos dispersos del territorio nacional. La segunda, los campesinos la resistían, porque su instinto de clase les decía que se verían privados de las conquistas más sentidas de su revolución. Tomaron pues la ciudad, la ocuparon un mes—caso único en la historia de América Latina— y, como no les servía para nada y en cambio disgregaba su cohesión y sus fuerzas, la abandonaron para continuar sus combates en el campo.

El ala burguesa y pequeñoburguesa nacionalista de la revolución, dirigida por Venustiano Carranza y Alvaro Obregón, hizo suya entonces la capital y, fuerte en esa conquista, dictó leyes obreras que le ganaron el apoyo de los sindicatos, y leyes agrarias—después, claro, no cumplidas— que quitaron base a los jefes campesinos. A partir de

llí, en una serie de cuatro grandes batallas, el general Obregón, futuro presidente de México, derrotó al ejército hasta entonces invicto de Pancho Villa y creó las condiciones para reunir el Congreso Constituyente de 1917 que dictó la actual Constitución mexicana, en ese entonces una de las más —sino la más— avanzadas del mundo.

Más larga, más confusa, más dura fue la lucha para deshacer el bastión de Emiliano Zapata. Este, en el pequeño estado de Morelos, vecino a la capital, basándose en las antiguas tradiciones de organización comunitaria de los campesinos indios y en un concentrado proletariado azucarero —Morelos reunía en un pequeño territorio 24 ingenios modernos—, había establecido un gobierno revolucionario local, repartido las tierras, nacionalizado los ingenios, hecho elegir juntas de gobierno campesino en cada aldea y organizado un ejército basado en la movilización y el apoyo de toda la población. El Ejército Libertador del Sur no era, en el fondo, otra cosa que el pueblo zapatista en armas, y de ahí provenía su debilidad cuando salía de su territorio y su fuerza insospechada e inagotable cuando se atrincheraba en éste.

La revolución del sur resistió cuatro años más encerrada y cercada en la especie de comuna campesina que los zapatistas habían construido —se dice que incluso un veterano de la Comuna de París, Octavio Jahn, combatía en sus fi-

las— y sólo el asesinato de Zapata, en abril de 1919, pudo ponerle fin y dispersarla.

* * *

La Revolución Mexicana había comenzado en noviembre de 1910, dirigida por un ala liberal de la burguesía encabezada por Francisco I. Madero. Su programa era muy simple: terminar con la dictadura de Porfirio Díaz, representante de la oligarquía terrateniente que ocupaba la Presidencia desde hacía cuarenta años, llamar a elecciones, dar derechos democráticos y considerar el problema candente de la tierra.

La promesa de derechos democráticos atrajo a la pequeña burguesía urbana, la alusión —porque no era más que eso— a la cuestión agraria despertó las esperanzas de inmensas masas campesinas: en México, con 15 millones de habitantes, 12 millones de campesinos carecían de tierras y 834 hacendados poseían 167.968,814 hectáreas.

Madero fue llevado al poder por esa ola, casi sin lucha. Pero cuando su gobierno comenzó a manobrar y a postergar la solución al problema de la tierra, los campesinos del sur, que se habían armado para apoyarlo, decidieron no entregar las armas y continuar la lucha hasta que las tierras les fueran repartidas. Emiliano Zapata proclamó en noviembre de 1911 su Plan de Ayala, donde planteaba una reforma agraria radical y la devolu-

ción de las tierras a las antiguas comunidades indias, y bajo la protección de los fusiles empezó a aplicarlo repartiendo las tierras de su estado de Morelos.

El gobierno de Madero decidió liquidar militarmente ese peligroso ejemplo que amenazaba atraer a todos los campesinos mexicanos. No pudo. Los zapatistas resistieron y contraatacaron y el ejército federal quedó atrapado en una guerra de guerrillas sin frente y sin retaguardia.

El ala derecha del gobierno, encabezada por el ministro de guerra Victoriano Huerta, irritada por el fracaso de las repetidas campañas de exterminio contra la rebelión campesina, y empujada por el embajador norteamericano, dio un golpe de Estado, fusiló al presidente Madero y puso al propio Huerta en el poder.

La derecha no había soñado las consecuencias de su aventura. Perdida la legitimidad del gobierno que servía para contener a los campesinos con esperanzas y a la pequeña burguesía urbana con concesiones, caía la última barrera a la confluencia de todo el descontento nacional. Como un flamazo, la guerra campesina se extendió por todo México. La fracción de la burguesía del norte encabezada por Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila, desconoció a Huerta y se puso al frente del movimiento armado contra su gobierno.

En respuesta a ese llamado Fran-

cisco Villa, dirigente campesino norteño, partidario de Madero, organizó el más poderoso ejército campesino de la Revolución Mexicana, la División del Norte, incorporó a su estado mayor a un general maderista de carrera, Felipe Angeles —uno de los pocos generales de carrera de los ejércitos revolucionarios—, y con sus fuerzas descendió hacia la capital. En su camino fue destrozando en batallas sucesivas las fuerzas mejores del Ejército Federal —es decir, el ejército nacional mexicano heredado del régimen anterior—, mientras el sur era controlado por los zapatistas en su ubicua e interminable guerra de guerrillas.

Pero, militarmente triunfante el movimiento contra Huerta, sus dirigentes oficiales, Carranza y Obregón, se vieron ante el mismo dilema de Madero. Quienes habían vencido eran sobre todo los ejércitos campesinos, apoyados en una insurrección agraria a escala nacional, y éstos presentaban la cuenta de sus victorias: el reparto de la tierra, toda y ahora mismo.

Allí se escindieron nuevamente las dos alas de la coalición que había derrotado a Huerta, el asesinato de Madero. El ala de Carranza se replegó con sus tropas sobre la costa atlántica para reorganizar sus fuerzas, más débiles que las de Villa y Zapata. El ala campesina, dueña del centro del país, ocupó la capital. Allí, en el momento culminante de sus triunfos, comenzó su retroceso. Su conclusión fue la derrota militar de la División del Norte

frente al ejército de Obregón y la extinción paulatina de la guerra campesina.

* * *

La Constitución mexicana de 1917 fue el resultado de toda esta lucha confusa y cambiante. Fue dictada por la fracción victoriosa, pero ésta tenía en su interior, a su vez, un ala izquierda. Esta tendencia jacobina (como se denominaba a sí misma) estaba compuesta sobre todo por jóvenes oficiales del ejército de Obregón con ideas socializantes —era diciembre de 1916 y enero de 1917, el momento más oscuro de la matanza europea, y nadie imaginaba la Revolución Rusa—, influidos por la tenacidad y la profundidad de la guerra campesina, de la cual terminaron por hacerse portavoces indirectos en el Congreso Constituyente de los triunfadores. Su figura más destacada era el general Francisco Múgica, que veinte años después sería uno de los principales ministros de Cárdenas y el promotor de la ley de expropiación del petróleo. El texto constitucional fue el resultado de un compromiso entre esa izquierda jacobina y el centro de Obregón, impuesto a la derecha carrancista.

Esto lo resumió muy bien el escritor norteamericano Frank Tannenbaum en uno de sus libros sobre México: “La Constitución fue escrita por los soldados de la revolución, no por los licenciados, que estaban allí, pero estaban generalmente en la oposición. En todas las

cuestiones decisivas los licenciados votaron contra la mayoría del Congreso. La mayoría estaba en manos de los soldados —generales, coroneles, mayores—, hombres que habían marchado atravesando la república y habían combatido sus batallas. Las ideas del Congreso Constituyente, tal como se desarrollaron, vinieron de fuentes dispersas. Los soldados, como me dijo el general Múgica, querían socializar la propiedad. Pero estaban asustados: asustados de su propio coraje, de sus propias ideas. Encontraron a todos los hombres instruidos en el Congreso opuestos a ellos. El artículo 27 fue un compromiso”.

Dicho en otros términos, toda la Constitución fue un compromiso entre dos “partidos militares”, el de la pequeñoburguesía socializante y el de la pequeñoburguesía nacionalista, impuesto al “partido cívico-militar” de la burguesía nacional; un compromiso, pues, entre el centro y la izquierda, impuesto a la derecha de la revolución. Los militares portugueses de 1975 tienen lejanos antecesores.

La Constitución de 1917 estableció, hasta hoy, los marcos jurídicos del desarrollo del Estado nacional mexicano. En su artículo 27 sanciona la nacionalización de la tierra y del subsuelo —como principio jurídico cuya aplicación práctica queda sujeta a las leyes eventuales—, dicta normas de reforma agraria, y sienta las bases jurídicas para una política de nacionalizaciones. En su artículo 123, incorpora al texto

constitucional conquistas obreras como la jornada de ocho horas, el salario vital mínimo, el derecho a la vivienda, la indemnización por accidentes de trabajo, y otras. En los artículos 39 y 10, confirmó dos principios que venían de la anterior Constitución liberal de 1857: “el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno” y el derecho de “poseer armas de cualquier clase para su seguridad y legítima defensa”.

* * *

En 1920, cuando se cerraron los diez años de lucha armada, el país había cambiado. No por la virtud de un texto constitucional, sino porque inmensas masas campesinas se habían puesto en movimiento, se habían incorporado a los ejércitos revolucionarios, habían convertido en generales y oficiales a sargentos, maestros, comerciantes, artesanos, vaqueros, ferroviarios, habían recorrido el país en todas direcciones en trenes y a caballo, habían dejado un millón de muertos en los campos de batalla y habían roto para siempre con la secular inmovilidad y resignación de la vida campesina. Esos diez años, más que la guerra de la independencia, más que la guerra contra el imperialismo francés encabezada por Benito Juárez, forjaron el México moderno, el carácter y las tradiciones de su pueblo, su conciencia, sus canciones, su literatura.

En esos diez años la antigua clase dominante, la oligarquía terrateniente, fue barrida de raíz, caso único en toda América Latina hasta la Revolución Cubana. Es cierto que sólo en mínima parte las tierras fueron repartidas a los campesinos y que nuevas propiedades se reconstituyeron en manos de muchos generales del nuevo régimen revolucionario y de sus familias. Pero la liquidación como clase de la vieja oligarquía eliminó en México al sector que constituye el aliado social más seguro del imperialismo en cualquier país de América Latina. Y con eso, suprimió la posibilidad de un gobierno que sea agente directo del imperialismo norteamericano. Todos los gobiernos mexicanos sucesivos, en efecto, aun aquellos más conservadores, han mantenido una actitud de distanciamiento, a veces de oposición, con respecto a la política exterior norteamericana, aunque —con excepción de Cárdenas— no hayan impedido —lejos de ello— la penetración económica de sus capitales.

Por otro lado, México fue el primer país latinoamericano que reconoció a la Unión Soviética y la primera embajadora de ésta, en los años 20, fue Alejandra Kollontai. Y entre las historias curiosas de esta revolución, el comunista bengalí M. N. Roy cuenta en sus “memorias” que, enviado a México por la III Internacional, regresó a la Unión Soviética con un pasaporte diplomático mexicano otorgado por órdenes de Carranza.

Todos los gobiernos sucesivos gobernaron en nombre de la revolución mexicana, con una política nacionalista de desarrollo del capitalismo en el país. Todos mantuvieron la invocación a las promesas de reforma agraria de la revolución, aunque los repartos de tierra fueron la mayoría de las veces limitados a lo imprescindible para contener la presión campesina. Todos buscaron apoyarse en el movimiento obrero, controlándolo al mismo tiempo por medio de un aparato sindical estrechamente ligado al Estado.

Es decir, todos los gobiernos posteriores al triunfo de la revolución reconocieron en ésta su fuente de legitimidad ante el país y desarrollaron una política nacionalista que buscaba apoyarse en las masas, haciéndoles concesiones, y controlarlas al mismo tiempo, impidiendo su desplazamiento a la izquierda. Pero esa política, dirigida a evitar una continuación o una reanudación del movimiento revolucionario, significaba también que el gobierno debía depender de las masas tanto para su propia estabilidad interior como para poder resistir la presión del imperialismo contra su política nacionalista. Su orientación política, pues, osciló invariablemente dentro de esta relación dialéctica de control-dependencia.

El régimen surgido de la revolución mexicana se adelantó al menos en un cuarto de siglo, en ése y en muchos otros rasgos de su política, a lo que serían el curso y las características de tantos gobiernos

nacionalistas surgidos en los países de Africa, Asia y América Latina después de la segunda guerra mundial.

* * *

Pero, al mismo tiempo, los diez años de lucha armada habían agotado la energía de las masas. Y en escala mundial, luego de la gran sacudida de la Revolución Rusa, el capitalismo entraba en los años 20 en un periodo de estabilización relativa. Todo esto favoreció en esos años la política oficial de "institucionalización" de la revolución, que significaba en esencia desarrollar el capitalismo en el país y postergar nuevamente la solución del problema crucial de México: la entrega de la tierra a los campesinos.

Bajo la presión de este problema no resuelto habría de iniciarse en los años 30 la segunda etapa de ascenso de la revolución, la época cardenista. La crisis económica en Estados Unidos y el *New Deal* de Roosevelt contribuían a aliviar, en esos años, la presión permanente del norte.

En 1934 fue elegido presidente Lázaro Cárdenas. Había combatido como joven oficial en el ejército de Obregón y cuando llegó a la presidencia no tenía aún 40 años. Un crecimiento constante de las luchas obreras y de las movilizaciones campesinas había precedido su elección. Todas las aspiraciones que la primera etapa revolucionaria había dejado sin respuesta, se agitaban nuevamente.

Cárdenas significó un cambio radical en la dirección del Estado mexicano en la medida en que, en lugar de orientarse a enfrentar esas movilizaciones como había ocurrido con sus inmediatos predecesores, imprimió al gobierno un fuerte viraje a la izquierda y se colocó directamente a la cabeza de esas demandas. Confluyó así con el sentido político que daban a sus movimientos los obreros y campesinos. No existiendo en la realidad, ni tampoco todavía en su conciencia histórica, una alternativa de organización política revolucionaria independiente de la que daba el régimen estatal surgido de la revolución, esas movilizaciones presionaban para hallar un canal de expresión política en la izquierda del régimen. Cárdenas se hizo el representante de esta izquierda en el poder e inauguró así el segundo periodo ascendente de la revolución mexicana.

Puede decirse que, en realidad, con Cárdenas finalmente llegaron al poder los jacobinos que habían impreso su sello en la Constitución de 1917. Y desde allí, apoyándose en la organización y en la movilización de obreros y campesinos, se propusieron hacer efectivas las grandes promesas incumplidas de la revolución. El sexenio cardenista fue un periodo de transformación revolucionaria —en cuanto a la estructura económica del país— sin precedente en ningún país latinoamericano. Ella fue llevada adelante bajo el fuego concentrado de la prensa y la propaganda imperialista norte-

americana, inglesa y francesa, que acusaban al gobierno mexicano de “comunista” y de “bolchevique”, aun cuando sus medidas, por radicales que en esos momentos parecieran, nunca fueron más allá de los límites del capitalismo de Estado y de la ideología nacionalista revolucionaria.

Las medidas fundamentales del periodo cardenista fueron la reforma agraria y la nacionalización de las empresas petroleras y de los ferrocarriles.

* * *

Durante los seis años de la presidencia de Cárdenas se repartieron más de 20 millones de hectáreas —el doble que durante todos los regímenes anteriores surgidos de la revolución— y se favoreció especialmente la formación de ejidos, forma peculiar mexicana de cooperativas campesinas, proveniente de antiguas tradiciones indias, en las cuales el campesino dispone del usufructo de su parcela, pero legalmente no la puede vender ni alquilar, y donde hay diversas escalas de servicios en común —según el grado de desarrollo organizativo del ejido—, desde la comercialización hasta la utilización de maquinaria, créditos, asistencia técnica, etc. La forma superior de los ejidos, aplicada en los casos de expropiación de grandes explotaciones agrícolas que empleaban mano de obra asalariada, es el ejido colectivo, en el cual toda la tierra se cultiva en común.

El reparto de tierra afectó extensos latifundios de propiedad norteamericana o de nuevos terratenientes surgidos después de la revolución. Aunque resuelto por el gobierno y sancionado por ley, su aplicación no fue una tarea pacífica. Una cosa es dictar una ley de reforma agraria en la capital, otra vencer la resistencia de los terratenientes, de los reaccionarios locales, de todas las capas clientelares —incluso sectores campesinos atrasados— que los terratenientes logran agrupar en su torno. Los campesinos tuvieron que organizarse con las armas, apoyados por el gobierno. A veces tenían de su lado al jefe militar de la zona que los apoyaba contra el terrateniente y sus bandas armadas —“guardias blancas”, las llaman en México—, y a veces lo tenían en contra.

Los campesinos ocupaban haciendas y las repartían conforme a la ley, los terratenientes respondían con expediciones punitivas, quemando aldeas, asesinando maestros rurales —improvisados cuadros políticos de la reforma agraria cardenista— y cortando las orejas a los dirigentes campesinos que aprehendían. En esta guerra hubo miles de bajas por cada bando. Cárdenas en persona repartió armas a los campesinos en diversas regiones y formó una reserva rural de 60,000 hombres, todos armados y la mitad de a caballo. Esta reserva, especie de milicia campesina, estaba destinada a organizar la defensa armada del campesinado y más de

una vez sirvió también para desalentar intentos, preparativos o ilusiones de golpes militares reaccionarios contra el gobierno. El espectro de una nueva revolución armada, después de los diez años de guerra campesina, sin duda enfriaba el entusiasmo de muchos aspirantes al golpe de Estado.

La reforma agraria cardenista no fue completa. Al final de su periodo aun quedaban en México 308 latifundios de más de 100,000 hectáreas como promedio y 1,179 entre 10,000 y 40,000 hectáreas, con un total de más de 54 millones de hectáreas. Pero aun esta reforma limitada mostró lo que antes, y sobre todo después, confirmaron todos los intentos de reparto de tierras en los países agrarios: que no hay reforma agraria posible, por limitada que ella sea, si no se apoya en una movilización real de las masas campesinas; que la ley del Estado, sin ese apoyo, se convierte rápidamente en letra muerta frente a los poderosos intereses de los propietarios de la tierra, ligados generalmente con el imperialismo y con la burguesía exportadora; y que cuanto más radical es la reforma, tanto más profunda y organizada está obligada a ser la movilización campesina. Desde Egipto y Bolivia hasta la India y Etiopía, todas las reformas agrarias realizadas en los países dependientes que no han hecho una revolución socialista, confirman la experiencia mexicana de los años 30.

Al mismo tiempo la reforma agra-

ria, aun incompleta, fue lo suficientemente profunda como para asegurar una base de masas al régimen en el campo. Esta base campesina cubrió sus espaldas para que, apoyándose en la movilización del proletariado y particularmente de los obreros petroleros, Cárdenas acometiera la empresa más osada de su periodo: la nacionalización del petróleo. Ella fue acompañada por la nacionalización de los ferrocarriles, pero de ambas la fundamental y la que despertó las más violentas resistencias y amenazas exteriores, fue indudablemente la del petróleo.

* * *

La nacionalización de las empresas petroleras inglesas y norteamericanas el 18 de marzo de 1938, fue la culminación de una larga lucha de la tendencia nacionalista y de todo el pueblo mexicano, que venía desde la revolución y la Constitución de 1917. Cada vez que Estados Unidos había visto amenazados de expropiación sus intereses petroleros en México, aun en los gobiernos anteriores de Obregón y Calles, había agitado la amenaza de invasión armada.

Esta vez Cárdenas se apoyó en el movimiento obrero, y en particular en la organización sindical de los petroleros, para llevar adelante la nacionalización. Aprovechó por otro lado, con notable sentido de la oportunidad histórica, las luchas interimperialistas y las dificultades de los imperialismos norteamericano e

inglés, para hacer pasar entre ellas la política nacional de México.

Ambos imperialismos respondieron con una ofensiva de propaganda nacional e internacional, el retiro total de sus técnicos, el boicot organizado contra el petróleo mexicano en el mercado mundial que ellos controlaban, la calumnia contra el gobierno de Cárdenas acusado alternativa y a veces simultáneamente de "agente de Moscú" y de "agente de Berlín", de "comunista" y de "fascista". Las amenazas de invasión, veladamente repetidas, esta vez sin embargo no fueron más allá del estímulo a una aislada sublevación del general Cedillo, fracasada por falta total de apoyo social.

Mucho más serios fueron el retiro de los técnicos y el boicot internacional. Pero los pocos técnicos nacionales y los obreros mexicanos suplieron a los extranjeros, repararon las instalaciones, inventaron procedimientos técnicos, trabajaron horas y días suplementarios sin salario y lograron sacar adelante una industria que, según decían y creían en Londres y Nueva York, jamás iba a poder funcionar sin técnicos extranjeros. Como suele suceder en estos casos, este golpe económico derrotado se convirtió en una conquista para el pueblo mexicano, que adquirió en la experiencia misma una seguridad en sus propias fuerzas y en su capacidad colectiva que no se la podían dar todos los discursos del mundo.

Es claro que ni la estatización del petróleo ni la de los ferrocarriles

—eran medidas socialistas o “bolcheviques”, como las llamaba mundialmente la campaña reaccionaria de la época. Eran, sin embargo, un golpe muy serio a la dominación económica del imperialismo sobre México y a su autoridad en toda América Latina, y un ejemplo para todas las tendencias nacionalistas y revolucionarias latinoamericanas que saludaron inmediatamente como una victoria propia la expropiación petrolera mexicana.

Hay que decir, además, que si hoy las medidas de estatización en los países dependientes son relativamente frecuentes, México fue el primer país que estatizó el petróleo, hace casi cuarenta años, antes de la segunda guerra mundial, en pleno ascenso del nazismo, bajo la amenaza inmediata del vecino imperialista. Y que con ello, el Estado mexicano no estaba haciéndose cargo de una industria deficitaria, según las clásicas estatizaciones burguesas, sino que tomaba en sus manos *el sector más dinámico y productivo de la industria nacional* en ese entonces, como palanca para promover el conjunto del desarrollo económico.

Con la reforma agraria y el apoyo a las conquistas obreras —entre ellas los aumentos de salarios— el régimen cardenista buscó ampliar el mercado interno. Con la nacionalización de los ferrocarriles, controlar y racionalizar la red de comunicaciones de ese mercado, tanto para la comercialización de los productos agrarios como para la

provisión de los productos de la industria al campo. Y con la nacionalización del petróleo, disponer de los capitales que, a través del crédito y de la inversión, le permitirían financiar el desarrollo del capitalismo nacional y crear las obras de infraestructura necesarias para él, cuyos productos utilizarían la red ferroviaria y serían consumidos por el incrementado poder de compra del mercado interno.

* * *

Cárdenas esperaba asentar la independencia nacional sobre esas bases y, según las ideas de su tendencia, abrir camino a un progreso evolutivo hacia una más o menos lejana meta socialista. Para preparar ese futuro, se resolvió implantar en las escuelas la “educación socialista” y se incluyó en la Constitución este artículo 3º: “La educación que imparta el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social.”

Este texto constitucional, único entonces en América Latina y posiblemente en el mundo fuera de la Unión Soviética, resume bien la concepción del socialismo evolutivo del ala izquierda de la Revolución Mexicana. A pesar de su moderación, fue el centro de un ataque

concentrado y despiadado de todas las fuerzas reaccionarias, que temían no tanto el artículo 3º sino el impulso revolucionario que venía de las masas de México y cuyo reflejo indirecto era ese artículo. Las medidas del gobierno de Cárdenas, que lo habían convertido en uno de los centros del odio de la reacción internacional, eran medidas propias de la etapa democrática de una revolución que buscaba afirmar las bases para la independencia nacional.

México buscó apoyo en el mundo para esa política. No era sencillo. Eso que hoy se llama "Tercer Mundo" simplemente no existía: era el vasto mundo de los países coloniales y sojuzgados, desde la India hasta Argelia y desde Egipto hasta China. El fascismo se extendía en Europa y la Unión Soviética pugnaba por desarrollar su economía en los primeros planes quinquenales, entre el cerco exterior y los estragos de la represión interior del periodo de Stalin.

Un punto, no obstante, concentraba todas las esperanzas: España. En la guerra civil española se estaba decidiendo la última batalla contra el fascismo antes de la guerra mundial: si aquél vencía, ésta era inevitable. El México de Cárdenas comprendió a fondo lo que allí se jugaba y unió su suerte a la de la revolución española. Mientras el nazismo alemán y el fascismo italiano intervenían en apoyo de Franco y las potencias "democráticas" formaban el Comité de No Inter-

vención que contribuyó a ahogar a la democracia en España, el gobierno de México fue el único en el mundo —con excepción del de la Unión Soviética— que envió armas y pertrechos a la República Española. Lo hizo en medio de las grandes dificultades económicas y de la enorme pobreza del país mexicano, mientras los sindicatos movilizaban a obreros y campesinos que daban días de trabajo, productos y salarios para España. Y cuando la derrota fue inevitable, México envió naves de rescate y abrió sus puertas sin reservas y sin límites dando asilo, hogar y trabajo para todos los refugiados españoles, esos mismos a los cuales la Tercera República Francesa internaba en campos de concentración.

La derrota de España marcó también el cierre de la segunda etapa de la Revolución Mexicana. El final del periodo de Cárdenas coincidió con el primer año de la guerra mundial y el nacionalismo mexicano, aislado, se replegó a esperar épocas más favorables. Simbólicamente, el sucesor de Cárdenas en la presidencia, Manuel Avila Camacho, con el argumento de la "unidad nacional" suprimió en la Constitución la referencia a la educación socialista.

La historia enseña que las supresiones de este tipo no son jamás cuestiones de palabras. Lo que se eliminaba allí era la idea del socialismo como meta superior en la cual debía desembocar la evolución del nacionalismo revolucionario. Y lo

-que se proclamaba con ese acto “sin importancia”, era la alteración de todo el rumbo del Estado mexicano, que se orientó cada vez más resueltamente a favorecer el desarrollo capitalista entrelazado estrechamente con las inversiones imperialistas, dejando para las fechas conmemorativas la mención de la revolución.

Ese desarrollo económico, notable en muchos aspectos, se asentó en aparente paradoja sobre las conquistas democrático-revolucionarias del periodo cardenista.

El reparto parcial de la tierra por un lado amplió el mercado interno, y por el otro permitió —a través del juego de la comercialización, el crédito y la acumulación— en manos de neo-latifundistas de las parcelas que los campesinos ejidatarios empobrecidos debían arrendar subrepticamente a los ricos para no morir de hambre— que la parte más sustancial de la renta agraria sirviera para la acumulación capitalista privada en las ciudades.

Las empresas estatizadas sirvieron para financiar a los capitalistas privados. La inversión extranjera, particularmente de Estados Unidos, reducida a su nivel mínimo en los años de Cárdenas, creció incessantemente hasta controlar la mayor parte de las grandes empresas del país. El movimiento obrero y el movimiento campesino, organizados en grandes centrales bajo la protección del Estado durante el cardenismo, quedaron ligados a la política de ese Estado. Cuando éste

viró hacia la derecha, arrastró consigo a esas organizaciones.

Mientras la extensión de las revoluciones nacionalistas y de los movimientos de liberación nacional sacudía al viejo mundo colonial y semicolonial y daba origen, desde 1945 hasta la independencia de las colonias portuguesas en 1975, a lo que hoy es llamado “Tercer Mundo”, México, que a su modo había sido un precursor de ese proceso, atravesaba un largo periodo de estabilidad, sacudido periódicamente por algunos movimientos internos que no llegaban a poner en cuestión la continuidad del régimen de gobierno.

Esa continuidad, sin embargo, no provenía meramente del desarrollo económico, que nunca alcanzó a resolver definitivamente los problemas aun elementales de los campesinos —la tierra— y de los obreros —salario, conquistas sociales, derechos sindicales—, ni de la negación de derechos democráticos o de la represión contra las tendencias opositoras, aunque ésta en algunas etapas alcanzó formas tan violentas como la que sufrió el movimiento estudiantil de 1968. Estos factores intervenían, pero no eran ni podían ser los determinantes de aquella continuidad.

Ella proviene, primero, de que el Estado mexicano, aun bajo los gobiernos más conservadores, mantuvo las conquistas fundamentales de la revolución y, con ellas, mantuvo el consenso histórico de las masas mexicanas, aunque tuviera muchas

veces que enfrentar su oposición inmediata en huelgas y movilizaciones. Proviene, en segundo lugar, de que éstas mantienen en su propia conciencia la continuidad de la revolución, como el movimiento con el cual entraron en la historia de este siglo (como lo hicieron las rusas con el bolchevismo, las chinas con la guerra de liberación o las argentinas con el peronismo) y sienten que ese movimiento, contenido o desviado o interrumpido, nunca ha podido ser realmente derrotado o dispersado porque ahí están todavía sus conquistas básicas. Y hasta ahora todo gobierno mexicano, para contar con ese consenso, ha estado obligado a respetarlas en lo esencial y a hablar en nombre de la revolución. Proviene, en tercer lugar, de que aprovechando las dos condiciones anteriores, el Estado de la burguesía nacional ha logrado mantener hasta el presente las organizaciones obreras y campesinas ligadas a su propia estructura e impedir así que formulen una política independiente.

Quien no comprenda la vitalidad social profunda de esta revolución y se limite a moverse en el plano de la *política*, no podrá comprender esta triple relación combinada y contradictoria y tenderá a creer que la continuidad del régimen es obra del fraude electoral, de la indiferencia de las masas o de alguna esencia misteriosa del “alma mexicana”. Quedará entonces prisionero del espejismo que identifica la continuidad de la revolución con la

continuidad del régimen, y al oponerse a la primera se opondrá al segundo (como hace la derecha) o al oponerse al segundo negará a la primera (como hace la ultraizquierda). No verá entonces ese momento esencial del proceso histórico de toda revolución que es la “ruptura en la continuidad” y que en México, como en cada país, tiene y tendrá características específicas.

* * *

El hilo conductor a través del cual el Estado mexicano ha mantenido más constantemente la ligazón con la tradición revolucionaria, aun rompiéndola en muchos otros terrenos, ha sido la política exterior. México nunca cortó relaciones con Cuba. A mitad de los años 70, cuando la mayoría de los países de América Latina ya había aceptado restablecer esas relaciones, la política exterior de México podía ver con razón en ese cambio un reconocimiento a su tenacidad y una confirmación de sus opciones. Esa continuidad se manifestó también en la ruptura de relaciones con la dictadura militar de Chile y el asilo a los refugiados chilenos, o en el pedido de expulsión de la España franquista de la ONU en 1975 cuando fueron ejecutados los cinco revolucionarios nacionalistas vascos.

Ese hilo conductor ha permitido que hoy, cuando la mayoría de los países del llamado “Tercer Mundo” reivindica como suyas demandas que la revolución mexicana

planteó en su primera etapa y reafirmó en la época de Cárdenas, México pueda presentarse con un cierto derecho de primogenitura como uno de los portavoces principales de las aspiraciones nacionales, económicas y políticas de ese vasto mundo de los "países pobres".

Pero, más que al nivel de la política estatal, es en las capas más profundas del pueblo mexicano donde se ha mantenido la tradición y la continuidad de la revolución. Todo programa o movimiento de progreso social en México está obligado a basarse en esa tradición. Los pueblos avanzan utilizando los materiales legados por su propia historia y de ellos necesita partir cualquier perspectiva que no quiera ser un esquema abstracto y ajeno a la vida. Es lo que han enseñado Argelia, Angola y Vietnam: la necesidad de unir tradición y revolución y el dinamismo incomparable que esa combinación de fuerza da a un movimiento de liberación nacional y social.

La Revolución Mexicana, desde sus orígenes, unió objetivos nacionales y sociales. Villa y Zapata viven en la memoria colectiva como los símbolos de la época heroica, la de la lucha por la tierra; Cárdenas, como el dirigente del periodo de la lucha por la independencia nacional y por la extensión de las conquistas sociales de la revolución. El desarrollo económico de los últimos treinta años ha significado también un crecimiento muy grande de la clase obrera, en número

y en peso específico. México ya no es el país de las dos primeras etapas de la revolución y las estructuras políticas y sindicales heredadas del cardenismo y el poscardenismo de los años 40 no sólo se han osificado, sino que le quedan chicas. Es indudable que en su tercera etapa, por razones tanto nacionales como internacionales, un factor determinante será el ascenso de la hegemonía de la clase obrera en el frente nacional de la revolución. Cómo y a través de qué canales ese ascenso se operará, y en qué formas programáticas y organizativas esa hegemonía podrá afirmarse, son cuestiones claves del futuro de México.

Si la continuidad de la revolución mexicana vive hoy, como vivió siempre, ante todo en las luchas, los movimientos, las aspiraciones de sus protagonistas: obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales, técnicos, militares, ella se manifiesta también en la persistencia del nacionalismo mexicano en mantener el contacto con los movimientos y las aspiraciones de liberación nacional y social de todos los pueblos del mundo.

Entre sus dirigentes históricos, esa persistencia la expresó en su nivel más alto el general Lázaro Cárdenas hasta el último día de su vida, y aún después. Es indudable que ese año clave de la historia que fue 1968, cuya expresión en México fue el gran movimiento estudiantil por los derechos democráticos truncado con la masacre de Tlate-

lolco, influyó sobre Cárdenas determinando una nueva radicalización de sus posiciones programáticas. Ella se manifestó en dos discursos fundamentales, en las ciudades de Irapuato, en 1969, y de Guanajuato, en 1970.

A mediados de este año, el último de su vida, Cárdenas declaró a una periodista norteamericana:

“Creo que los principios del socialismo son compatibles con las ideas de la Revolución Mexicana en su ulterior e inevitable desarrollo”.

Un año después de su muerte, en octubre de 1971, su hijo leyó ante el presidente Echeverría su testamento político. Es un documento notable, donde denuncia el sometimiento del Estado y de la economía nacionales a las finanzas imperialistas y a sus centros de poder, se opone a “la política de unidad nacional sin distingos sociales, de liberalismo económico, de colaboración de clases” y a la “irrestricta penetración del capital extranjero” que han llevado a ese sometimiento, afirma que en el PRI conviven “explotadores y explotados, revolucionarios y reaccionarios”, reclama la vigencia de los derechos democráticos en el país y propone un programa para la continuación de la Revolución Mexicana.

Entre sus puntos más importantes, ese programa propone la nacionalización de la banca y de las industrias básicas; la planificación estatal de la producción industrial, agropecuaria y forestal; la liquida-

ción de todos los latifundios y el desarrollo de los ejidos colectivos; la ayuda estatal a los campesinos mediante créditos, semillas seleccionadas, asistencia técnica, maquinaria, precios de garantía para las cosechas, riego, todo ello financiado con los recursos de la banca nacionalizada; la nacionalización de los bosques; la alfabetización; la escuela primaria garantizada para toda la población; la reimplantación de la educación socialista; la democracia sindical y la independencia de los sindicatos con respecto al Estado; la extensión de la organización sindical y el cumplimiento de todas las conquistas sociales legales actualmente no respetadas (estabilidad en el trabajo, salario mínimo, seguridad social, vivienda obrera, etc.); el comercio con todos los países del mundo; la alianza antimperialista latinoamericana.

Este documento póstumo del último de los jefes históricos de la revolución es, todavía hoy, el programa más avanzado producido por el nacionalismo revolucionario de México.

II. *Las cuestiones*

El programa de Cárdenas y el sexenio de Echeverría anuncian, cada uno a su modo, la maduración de una nueva “ruptura en la continuidad” en el proceso del nacionalismo mexicano.

Cárdenas propuso un programa que sale de los marcos estrictos del

nacionalismo y se interna en el campo del socialismo, según la dialéctica “continuidad-superación” con que progresó del nacionalismo al socialismo, en su momento, la revolución vietnamita.

El periodo de Echeverría marca, con todas sus agudas contradicciones, el límite máximo al cual puede llegar en México, sobre todo en su política exterior, cualquier gobierno nacionalista de hoy.

La situación mundial y su propia evolución interior han colocado una vez más al nacionalismo mexicano ante una frontera en la cual es difícil permanecer indefinidamente. O se la atraviesa introduciendo posiciones socialistas, siguiendo y organizando el impulso de las fuerzas sociales que han llevado hasta ella, o se regresa, porque en la inmovilidad esas fuerzas pierden su impulso interior y se requiere entonces una nueva etapa histórica para recuperarlo. Esta no es, por supuesto, una decisión que se resuelve en una semana o un mes. Puede pasar todo un periodo mientras madura una respuesta. Pero ese periodo tampoco es indefinido. México se halla ante esa situación que no es sino la expresión en el país de la opción ante la cual se van viendo colocados todos los nacionalismos revolucionarios de los países dependientes: la trascrecencia social del movimiento nacional.

Esta situación plantea tres cuestiones fundamentales a la revolución mexicana en particular y a la revolución nacionalista en general:

1) la cuestión estatal; 2) la cuestión nacionalista; 3) la cuestión socialista.

* * *

El Estado surgido de la revolución mexicana de 1910-1920 ha ejercido una función única en la organización del país y en la formación de la burguesía nacional. El instrumento político de la hegemonía burguesa en el frente de la revolución ha sido el partido, el PRI. Pero el PRI es, en realidad, un partido hecho Estado o una emanación política de este Estado, y Estado y partido se confunden inextricablemente. El instrumento real, económico y social, de la hegemonía burguesa, es el Estado nacional-revolucionario.

La revolución creó un nuevo Estado y un nuevo ejército, sancionados en la Constitución de 1917 —un poco al modo como en Italia la revolución antifascista se institucionalizó en una Constitución que ha sido la base jurídica para el actual aparato estatal.

Ese Estado nutrió, y prácticamente dio origen a la nueva burguesía mexicana. Esta, sin duda, mantiene con la oligarquía terrateniente dominante en el régimen anterior una continuidad basada en la protección jurídica del derecho de propiedad. Pero en gran medida es también una clase nueva, creada por los negocios estatales, las prebendas, la manipulación de los fondos, de las ganancias y de las con-

cesiones de las empresas del Estado, la utilización del crédito y los mil otros recursos que la disposición del aparato estatal concede en los países dependientes para la formación de una clase burguesa. No muy diversa, por otra parte, es la función que ese aparato ha desempeñado en épocas pasadas —y a veces no tan pasadas— en los viejos países capitalistas como acelerador, protector y garante de la consolidación y el enriquecimiento de una clase burguesa nacional.

Al mismo tiempo ese Estado, garante también de algunas de las conquistas hechas por las masas en la revolución, se apoyó por un lado en el consenso de éstas y desarrolló por el otro una capa de dirigentes sindicales estrechamente ligados al Estado por una red de intereses y prebendas económicas y políticas, entre ellas la posibilidad de convertirse ellos mismos en capitalistas —como ha ocurrido en no pocos casos— a través de contratos de empresas del Estado.

Ese apoyo de las masas le era indispensable para impedir que el automatismo económico y la penetración del capital extranjero volviera a llevar a la vieja oligarquía reconstituída al poder y al imperialismo al control del país. Pero le era necesario también, cuando el movimiento de masas amenazaba su propio equilibrio como Estado de la burguesía, recurrir a la represión contra ellas. En esa oscilación entre concesiones y represión se ha movido el Estado mexicano desde

la época de la revolución. A su amparo fue creciendo la “burguesía revolucionaria”, una clase híbrida como su propio nombre, cuyos métodos los definió tal vez mejor que nadie, con alegre cinismo, uno de sus fundadores, el presidente Obregón, en un dicho famoso: “No hay general que resista un cañonazo de 50,000 pesos.”

De este modo el Estado mexicano, aparato peculiar producto de la historia, del país, y al mismo tiempo paradigma de toda una serie de Estados nacionalistas posteriores a la segunda guerra mundial, desde el Estado peronista en Argentina hasta el nasserista en Egipto y el del Partido del Congreso en la India, cumple una cuádruple función:

1) Desarrolla a la burguesía (para ello, enfrenta a las masas y a la vez les hace ciertas concesiones económicas para extender el mercado interno).

2) Resiste al imperialismo (para ello, se apoya en las masas y enfrenta al sector de la burguesía aliado económica y políticamente a Estados Unidos).

3) Mantiene la tradición nacional de la revolución (para ello, se apoya en las masas y enfrenta al sector de la burguesía aliado a los restos de la antigua oligarquía terrateniente).

4) Controla a las masas (para ello, enfrenta y reprime los movimientos independientes de las masas y se apoya en la dirección burocrática de sus organizaciones sindica-

les, portadora de la ideología burguesa en el seno de éstas).

A través de este juego de equilibrios que constituye el bonapartismo típico de los países dependientes, el Estado va cumpliendo su función esencial: el desarrollo de una burguesía nacional entre la clase obrera (y la gran masa campesina, a la cual trata de conservar como base política) y el imperialismo. Es la forma peculiar de desarrollo capitalista de estos países.

Por la debilidad social de esa burguesía nacional, en ese juego el Estado tiende a ser todo. Y ese poder, siguiendo la misma lógica, se concentra en el presidente. El poder legislativo y el poder judicial existen, pero carecen de toda independencia con respecto al ejecutivo. El parlamento mexicano es una ficción. Este poder, en el cual el Estado es todo, tiende, pues, a asumir formas totalitarias. Y si utilizamos esta palabra "maldita", es precisamente para denunciar de inmediato uno de los errores más funestos que la izquierda tradicional (y no sólo ella) ha cometido contra los gobiernos nacionalistas de este tipo: el de calificarlos de "fascistas", asimilándolos formalmente al carácter totalitario —pero de signo opuesto— del Estado fascista. En la raíz de este error está el mismo tipo de análisis "democrático" por el cual los reaccionarios de toda laya suelen calificar de "fascista" al régimen soviético. Debe destacarse que ambas califi-

caciones han contado siempre con el beneplácito de los ideólogos del Estado norteamericano.

Por otro lado, el error garrafal de todos los ideólogos democrático-burgueses en México —incluso de aquellos que se consideran marxistas— es creer que, como en las revoluciones burguesas de Europa, la superación de esta forma peculiar de "absolutismo" del Estado mexicano —en la cual influye también el enorme peso del campesinado en la sociedad— está en la aplicación de la democracia parlamentaria. La democracia parlamentaria no es el futuro de este Estado, es su pasado: el último parlamento digno de tal nombre funcionó bajo la presidencia de Madero, en 1912, y murió con él. En las aspiraciones democráticas de las masas mexicanas, vivas y apremiantes, no figuran las formas parlamentarias, que en realidad fueron destruidas por la Revolución.

La democracia en México buscará otros caminos. Y estos tienen que ver con la relación que existe entre este Estado nacional surgido de la Revolución y el proceso interior del nacionalismo.

* * *

El nacionalismo es la ideología oficial de la Revolución Mexicana y, en consecuencia, de su Estado. Es una ideología necesariamente ambigua porque no tiene una definición de clase y enmascara entonces intereses contrapuestos. La

comparten la burguesía, la pequenoburguesía, el proletariado y los campesinos. Pero cada clase social tiende a darle un contenido diferente y la lucha de clases se desarrolla así en el interior mismo del nacionalismo.

En su ala burguesa, el nacionalismo va esfumándose y tiende a confundirse con la alianza con el imperialismo, encubierta por supuesto con un lenguaje técnico y sociológico, “eficientista” y pragmático, propio de universidad americana.

En su ala proletaria, el nacionalismo se acentúa y desarrolla tendencias socialistas que finalmente confluyen o pueden confluír con el marxismo.

El fenómeno característico de esta fase del nacionalismo (y no sólo en México, sino también a escala mundial) es que ambas alas tienden a distanciarse y a enfrentarse en polos contrapuestos, aunque todavía ligados por la ideología común del nacionalismo. En la base de ese enfrentamiento está, naturalmente, la economía y la agudización de la crisis mundial del capitalismo. El otro fenómeno que lo acompaña es el desplazamiento hacia la izquierda de la pequeña burguesía nacionalista, del vasto sector intermedio de técnicos, profesionistas, intelectuales, funcionarios que decenios atrás miraban el espejismo del modo de vida americano y hoy miran el socialismo. Y el tercer fenómeno concomitante es la radicalización

de las movilizaciones y de las aspiraciones del campesinado, cuya incabable pobreza no sólo no encuentra salida en el sistema sino que se ve agravada por la crisis y cuya conciencia está mucho más influida de lo que las ciudades creen por los ejemplos de China, de Cuba y de Vietnam.

La confluencia de estos tres fenómenos se expresa en la radicalización del nacionalismo revolucionario.

Pero a su vez, ese nacionalismo revolucionario está ligado al Estado surgido de la Revolución, entrelazado con él, y en su evolución hacia posiciones socialistas no se siente inclinado a romper con ese Estado: en primer lugar, porque se nutre de él —incluso económicamente— y porque en parte lo siente suyo y lo cree recuperable; en segundo lugar, porque una cosa es acercarse al programa socialista y otra es decidirse a quemar las naves y a depender exclusivamente, en el plano organizativo, de la clase obrera; y en tercer lugar, hecho no menos decisivo, porque ésta no tiene un partido propio que pueda absorber y dar una perspectiva independiente del Estado a esa evolución socialista del nacionalismo revolucionario. La clase obrera misma en su aspiración es socialista y en su ideología es aún nacionalista.

En ese dilema, el nacionalismo revolucionario cumple también la función de contener la evolución del proletariado, el campesinado y

las masas pobres dentro de los marcos del Estado de la burguesía.

Sin embargo, quien vea solamente esa función no comprenderá dos cosas esenciales: 1) que esa contención es posible porque también refleja el nivel de conciencia de las masas y la carencia de un partido obrero; 2) que al mismo tiempo, esa función no detiene la maduración de la conciencia revolucionaria de esos sectores sino que la encierra dentro de esas estructuras estatales, acumulando así en el interior de éstas una carga explosiva que las debilita en su función estrictamente burguesa y las expone a potenciales desgarramientos si la agudización de las contradicciones se hace insostenible.

Este último peligro se acentúa por una peculiar debilidad del Estado mexicano. Así como en sus relaciones con la clase obrera depende de los dirigentes sindicales burocráticos —los charros, verdaderos caciques sindicales— que son una casta con intereses propios, los intermediarios del dominio político sobre el campesinado son los caciques, especie de notables locales que generalmente no tienen ningún título ni ocupan ningún cargo pero son los influyentes señores de vidas y haciendas en su región. Estos combinan el paternalismo y la violencia privada para impedir la organización sindical del campesinado. No es un punto de fuerza del Estado el que una parte de su estabilidad dependa de semejan-

te sistema clientelar, ajeno a toda ley y oficialmente “inexistente”.

El nacionalismo revolucionario mexicano —como lo atestigua, entre muchos otros síntomas, el programa rústimo de Cárdenas— acepta en términos generales la perspectiva del socialismo. Pero ninguna transformación social se opera por la aceptación de una perspectiva, y ni siquiera por la aprobación de un programa. Hace falta la fuerza material, encarnada en las organizaciones propias de cada clase en la sociedad.

La contradicción de los nacionalistas revolucionarios reside en que, para ellos, esa fuerza material se encarna en el Estado nacional, que es un Estado de la burguesía que no puede ir más allá de los límites ideológicos y programáticos de ésta. La suerte corrida por la “educación socialista” es, en el plano de la ideología, la demostración más clara de ese límite infranqueable.

Entonces, cuando los conflictos sociales se agudizan, quedan presos de esa contradicción: apoyan a los movimientos obreros y campesinos incluso hasta acciones de lucha extremas, pero cada vez que dichos movimientos, en su desarrollo natural, se ven llevados a enfrentarse antagónicamente con el Estado, el nacionalismo revolucionario se detiene. No se pone contra las masas, pero es orgánicamente incapaz de ponerse contra el Estado. Deja que éste reprima a las masas, trata de atenuar o de contener esa represión desde aden-

tro y, al extremo, la sufre él mismo en sus representantes más radicales. Pero no alcanza a generar una alternativa a nivel organizativo que sea la expresión de la perspectiva socialista que a nivel de la ideología afirma aceptar.

Y si un programa no genera una organización propia que lo exprese y lo lleve a la realidad, que lo traslade de la teoría a la historia, entonces inevitablemente debe ceder el paso a la organización que representa el programa contrario y que lo impone en los hechos. Al no salirse de los marcos organizativos del Estado nacional, el nacionalismo revolucionario no puede llevar a la realidad un programa socialista que sí va más allá de esos marcos. En consecuencia, está obligado en los momentos críticos a ceder ante el nacionalismo burgués.

Esta dialéctica cubre los últimos cuarenta años de la historia mexicana.

A este punto, a las tendencias socialistas y a las tendencias que se declaran marxistas se les han presentado, a primera vista, dos caminos: 1) seguir al nacionalismo revolucionario, confiar en su lenguaje socializante, esperar que su propia evolución —empujada por las movilizaciones de las masas— lo haga avanzar hacia el socialismo junto con el Estado nacional, y quedar en consecuencia completamente desarmadas y a la merced de todos los golpes cuando el nacionalismo revolucionario muestra sus límites y retrocede; o 2)

denunciar desde un principio al nacionalismo como un freno al movimiento de masas, como una ideología demagógica al servicio exclusivo de la burguesía, como una estafa que nada tiene que ver con la revolución ni con el socialismo, y encontrar en consecuencia una satisfacción y una confirmación de las propias previsiones cada vez que el nacionalismo se detiene o retrocede —pero con él, el movimiento de masas que dirige y el proceso revolucionario mismo.

Ambos caminos llevan a un callejón sin salida. El primero se llama oportunismo, el segundo, sectarismo o ultraizquierdismo. Lo que ambos tienen en común es que aíslan a las tendencias socialistas y marxistas del proceso real de masas en el país, en este caso en México, y las confinan en el seguidismo acrítico o en la denuncia estéril, extremos ambos incapaces de organizar ninguna fuerza para cambiar la realidad. Les impiden, en síntesis, “hacer política” e introducirse y pesar en el proceso real en el seno del nacionalismo, el proceso complejo, contradictorio y articulado a través del cual el movimiento nacional de las masas madura del nacionalismo al socialismo.

En sus posiciones hacia los movimientos nacionalistas de los países dependientes, la izquierda europea frecuentemente ha oscilado entre ambos extremos, como lo ha hecho muchas veces la izquierda marxista de esos países educada en los esquemas mal comprendidos y

ial aplicados del marxismo europeo. Así, la izquierda europea alternativamente ha acusado de "fascistas" o ha sostenido acriticamente movimientos nacionalistas como el peronismo o el nasserismo o a gobiernos nacionalistas como los de Argelia o de Etiopía, de Perú o de Siria, sin ver los matices y las contradicciones de su proceso interior.

Y si con México rara vez se ha pronunciado, es porque el "sistema mexicano" amparado en la leyenda y la epopeya de su revolución campesina, resulta verdaderamente un "misterio" no clasificable dentro de las categorías clásicas de izquierda, centro y derecha.

Posiblemente uno de los rasgos más universales de la experiencia vietnamita —que no se puede tomar como "modelo", porque la teoría de los modelos es una de las más superficiales que existen— es precisamente que ella muestra un proceso típico de trascrecimiento de una revolución del nacionalismo al socialismo, y lo muestra incluso en su organización dirigente, pues el Partido Comunista de Vietnam proviene de una organización nacionalista cuyo dirigente principal era Ho Chi Minh.

Ni México ni América Latina son Vietnam. Pero si algo enseña la Revolución Mexicana es que en todos estos países, el avance real hacia el socialismo pasa por la revolución nacionalista, en un proceso que va del nacionalismo revolucionario al programa socialista. Y el desafío al cual debe responder

el marxismo es el de fundirse con ese proceso, vivir y crecer dentro de él y transformarse en la teoría universal a través de la cual encuentra su más genuina expresión el movimiento nacional de las masas. Que, después de todo, es también el desafío que tiene por delante en cada país del mundo.

Es aquí donde la cuestión nacionalista, que es inseparable de la cuestión estatal, se une con la cuestión socialista.

* * *

Para hacer avanzar el proceso, no se trata simplemente de proponer que la izquierda nacionalista, el nacionalismo revolucionario, rompa políticamente con el nacionalismo burgués y forme un nuevo partido más a la izquierda. En México, bajo el impacto de la Revolución cubana, el cardenismo llegó a organizar un movimiento independiente en 1961, el Movimiento de Liberación Nacional, apoyado en una nueva organización sindical campesina, la Central Campesina Independiente, ambos con un programa nacionalista revolucionario muy avanzado, lindante con el socialismo. Pero luego del impulso inicial ambos movimientos —que no se apoyaban en la clase obrera sino en los campesinos y la pequeña burguesía— progresivamente volvieron al cauce general del nacionalismo mexicano, reduciéndose a una función modesta de izquierda ligada al Estado, hasta prácticamente desaparecer.

De lo que se trata sobre todo es de encontrar y desarrollar las formas programáticas, políticas y organizativas para hacer ascender —dentro del movimiento nacionalista en el cual a través del Estado se ejerce la hegemonía de la burguesía—, la hegemonía de una nueva clase, la que representa en su programa un nuevo proyecto de sociedad, la clase obrera. Y se trata de hacer ascender esa hegemonía no contra la corriente central del nacionalismo sino a partir de ésta, asumiendo sus tradiciones revolucionarias y sus conquistas.

Si la hegemonía de la clase obrera está obligada a comenzar a afirmarse, en la próxima fase de la Revolución Mexicana y latinoamericana en general, a partir de la corriente nacionalista, no es solamente por la necesidad de una política de alianzas. Es porque en América Latina —con excepción de Chile— no hay partidos obreros de masas. La clase obrera aspira al socialismo, pero su conciencia política es aún nacionalista. Entonces, genera una izquierda nacionalista, que es también estimulada por la existencia de los países socialistas y el crecimiento de las ideas socialistas en el mundo, la cual plantea programas como el de Cárdenas en México o consignas como la de “la patria socialista” de la izquierda peronista argentina.

Indudablemente, la hegemonía de la clase obrera requiere que ésta cuente con su propio partido de clase. Pero éste no nace de la pré-

dica, sino de la lucha social concreta en el plano nacional. Y esa lucha hoy, en México, pasa a nivel de masas por el nacionalismo revolucionario, como en Argelia, en Angola o en Argentina.

Ideología nacionalista no significa falta de conciencia de clase. Al contrario: ésta se expresa enérgicamente a través de los sindicatos, que constituyen la forma organizada del polo obrero del nacionalismo (el sindicato no es lo mismo que su dirección, como creen invariablemente, por motivos opuestos, tanto ésta como la ultraizquierda). Esas organizaciones, a falta de partido obrero, tienden constantemente a cumplir funciones políticas. Pero a su vez la estructura del aparato sindical, protegida por el Estado nacionalista, es controlada por éste: también aquí México y Argentina son casos típicos. Y también aquí, la ultraizquierda confunde el hecho de que el aparato sindical y sus dirigentes estén ligados y sometidos al aparato del Estado —hecho que es la norma, y no la excepción, en todos los sindicatos de esta época en los cuales no sea hegemónica una tendencia de clase— con una supuesta carencia de conciencia de clase de parte de los trabajadores, cerrándose así toda posibilidad de influir en los sindicatos tal cual son, y no tal cual sus aspiraciones subjetivas quisieran que fueran. Todo esto es muy conocido, pero a veces no está demás seguirlo repitiendo.

Afirmar la hegemonía de la cla-

se obrera significa arrancarla a la influencia de la ideología conservadora o reaccionaria de la burguesía nacional. Pero para ello es necesario comprender el contenido revolucionario del nacionalismo de la clase obrera y de sus aliados campesinos y hacer madurar allí sus conclusiones socialistas. Es decir, es necesario la lucha de clases dentro del nacionalismo. Y ver un hecho fundamental: que la atracción que el progreso económico de los países socialistas ejerce sobre la imaginación de las masas de estos países no se vuelve a favor de un crecimiento de los pequeños partidos comunistas sino fundamentalmente dentro de las organizaciones donde esas masas ya están agrupadas, dentro del movimiento nacionalista y no a través de una ruptura inmediata de éste, sino de la radicalización *en su seno* de un ala izquierda que adopta el programa socialista.

Pero esto *no resuelve la cuestión de la hegemonía obrera*, que es la clave de la cuestión socialista. El ascenso de esa hegemonía comienza por la organización autónoma de la clase. Y esta organización, en los procesos revolucionarios nacionalistas, se concentra todavía en los sindicatos y en las fábricas.

En tales condiciones, la tarea de afirmar la hegemonía de la clase obrera —que es a la vez la tarea de arrancar a ésta a la dependencia del nacionalismo burgués, de su partido y de su Estado— pasa en lo inmediato por la lucha por lo-

grar la independencia de esos sindicatos con respecto al Estado y por conquistar dentro de ellos un funcionamiento democrático.

Lo cual plantea el terreno más concreto e inmediato de la conquista de los derechos democráticos, que en México se identifican sobre todo —como las movilizaciones de 1968 y todas las posteriores lo han confirmado— con la afirmación de la tendencia de los trabajadores y los estudiantes, en sus movimientos por demandas inmediatas, a constituir organismos colectivos y electivos de democracia directa en la sociedad: en los sindicatos, en las empresas, en las universidades, en las escuelas, en los ejidos, en los barrios, en gobiernos locales. Y toda movilización democrática es un terreno favorable para el crecimiento de la influencia de los trabajadores dentro del nacionalismo.

Influencia creciente no es todavía hegemonía. La condición de ésta es que la clase obrera tenga *su propio partido*. En México, las fuerzas de masas de ese partido están hoy concentradas en las organizaciones sindicales. Esas fuerzas no son atraídas a intervenir políticamente como clase a través de los pequeños partidos de la izquierda marxista, sino que lo hacen, aún a nivel elemental, por medio de esos mismos sindicatos. Es en ese proceso donde madura su conciencia política de clase. La perspectiva más probable es que su crecimiento hacia partido obrero independiente se realice por la conjunción

entre esa maduración de las movilizaciones en los lugares de trabajo y en las organizaciones sindicales, la maduración del programa socialista en la izquierda nacionalista que se reconoce en el programa de Cárdenas y la intervención programática conciente del marxismo revolucionario. Dentro de esa perspectiva —y no en una función exterior de simple “conciencia crítica”— la izquierda marxista con sus actuales organizaciones políticas y partidarias tiene una tarea importante y necesaria que sólo ella puede cumplir.

* * *

Todo indica, decíamos, que el nacionalismo mexicano, el movimiento histórico surgido de la Revolución Mexicana, se encuentra ante una frontera. Atravesarla requiere una etapa de transición, que puede abarcar un periodo de años cuya duración no depende solamente de la maduración de las fuerzas interiores de México sino también, en medida muy importante, de la situación mundial y de su evolución.

En esa transición, que la burguesía nacional resistirá por todos medios porque significa el fin de su dominación política, la continuación de la Revolución Mexicana en un plano histórico superior requiere una nueva ruptura, similar a la de la época de Cárdenas pero cualitativamente diferente en un punto: el paso de la hegemonía

burguesa a la hegemonía obrera en el movimiento nacional antimperialista. Y esa ruptura es el proceso complejo, duro, extendido y articulado de luchas sociales y políticas por el cual el movimiento antimperialista trascrece en movimiento socialista. Vietnam dio un ejemplo de este proceso, pero no una receta ni un modelo. México, como cada país, deberá elaborar en la realidad nacional su propia respuesta. Pero al hacerlo, deberá tener presente la lección de Vietnam y de todas las otras revoluciones nacionales y socialistas de nuestra época: en ese trascrecimiento hay que contar, antes o después, con la oposición violenta del Estado de la burguesía nacional, que a nada teme más que a la *organización política independiente de la clase obrera*, requisito ineludible para que ésta pueda imponer su hegemonía en la revolución. Pues precisamente la clave de ese trascrecimiento reside en la organización autónoma de la clase en su propio partido, independiente en su programa, en su organización y en sus perspectivas, de ese Estado y de su partido.

Este es el problema esencial de la Revolución Mexicana y, más en general, el de todos los procesos revolucionarios nacionalistas en América Latina.

Para la izquierda europea es fundamental discutir esas cuestiones: en primer lugar, porque es necesario el aporte de su experiencia y de su opinión en el debate

abierto en las tendencias nacionalistas y socialistas de América Latina sobre el destino y el programa de la revolución; en segundo lugar, porque dentro del avance general de la izquierda en Europa,

ella deberá buscar las alianzas necesarias también en América Latina y esto no podrá hacerlo sin una comprensión precisa del carácter, las formas y las raíces de sus procesos revolucionarios.

Advertencia

Este trabajo fue escrito a principios de 1976 para un número especial de *Politica Internazionale* dedicado a la situación de México en el año de la sucesión presidencial. Está dirigido a explicar al público italiano y europeo las raíces del nacionalismo de la Revolución Mexicana y de su persistencia como ideología de masas y, al mismo tiempo, la crisis de ese nacionalismo y del Estado del cual es expresión ideológica.

La cuestión de la hegemonía obrera como condición del trascrecimiento de la conciencia de las masas desde la ideología nacionalista hacia el programa socialista, planteada como conclusión del artículo, se presenta hoy como la cuestión central para el futuro político del país. Ella implica y requiere la ruptura de la clase obrera con su dependencia del Estado y de su ideología nacional-burguesa; es decir, la ruptura de la *larga integración de la clase obrera en el Estado* que la subordina a sus fines, subordinación cuya forma moderna, prolongada hasta el presente, tuvo su origen en Morones y en Obregón, verdaderos artífices de ese Estado.

Esa ruptura se materializa en la organización de la clase en su propio partido, es decir, la autoorganización de su conciencia socialista separada de y opuesta a la ideología nacionalista de la burguesía, su Estado y su partido. Esto no sólo vacía de contenido al tipo de partido burgués "interclasista" que es el PRI, tal como se ha venido conformando desde su constitución como PNR, hace casi medio siglo. Significa también la ruptura de las bases sociales y de la estructura histórica de ese Estado surgido de la Revolución Mexicana, es decir, del modo específico de dominación burguesa en el país. Esto es lo que está en cuestión, y en este proceso de cambio ya iniciado, actualmente es la burguesía quien tiene, preventivamente, la iniciativa, como la tuvo en la constitución y la conformación de ese Estado.

Sobre las condiciones y las formas en las cuales se opera la formación de la conciencia de clase del proletariado, estamos realizando un trabajo de investigación en la Facultad de Economía, algunos de cuyos materiales preliminares han sido publicados en la revista *Coyoacán*, números 1 y 2, con los títulos de "Once tesis sobre México: Identidad nacional, hegemonía proletaria, revolución socialista" (mayo 1977) y "Curva de salarios y conciencia obrera" (diciembre 1977), respectivamente. Ambos trabajos son una continuación y un desarrollo de los argumentos centrales sintéticamente expuestos en el presente artículo.

A. G.

Marzo de 1978